



Lola García

El naufragio

La deconstrucción del sueño independentista

Lola García
El naufragio

La deconstrucción del sueño independentista

Prólogo de Enric Juliana

ediciones península

© María Dolores García García, 2018

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.

Primera edición: septiembre de 2018

© del prólogo: Enric Juliana Ricart, 2018

© de esta edición: Grup Editorial 62, S.L.U., 2018
Ediciones Península,
Diagonal 662-664
08034 Barcelona
edicionespeninsula@planeta.es
www.edicionespeninsula.com

PAPYRO - fotocomposición
C.P.I. - impresión
DEPÓSITO LEGAL: B. 13.278 - 2018
ISBN: 978-84-9942-722-5

ÍNDICE

Prólogo: «Se les fue de las manos», de ENRIC JULIANA	11
1. El Gobierno de la Generalitat, en la cárcel.	17
2. El <i>procés</i> pone rumbo de colisión.	29
3. El virus de la ruptura	51
4. Puentes secretos.	67
5. De la «bomba Pujol» al pacto tácito del 9-N.	81
6. Mas y el canto de las sirenas	97
7. A la papelera de la historia.	111
8. Una purga para encarar la recta final	139
9. El espejismo del 1-O	159
10. Presidente del Barça, no de Cataluña	183
11. El naufragio	195
Epílogo: Sin república y sin autonomía	229
Índice onomástico.	245

EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT, EN LA CÁRCEL

Varios furgones policiales salen de la Audiencia Nacional a toda velocidad. Los destellos de sus luces de alarma chocan con los flashes de los fotógrafos mientras cae la noche de este 2 de noviembre de 2017 en la que todo se ha venido abajo.

Los vehículos conducen a buena parte del Gobierno de Cataluña a la cárcel. Uno de los agentes de la policía que vigila el edificio judicial y ve salir los furgones ya augura que el recorrido va a ser desagradable para sus ocupantes cuando le suelta a su compañero de servicio: «Digo yo que estos van a ir follos, las van a pasar hasta allí...». El otro le responde entre risas: «Al osito ya verás cómo lo van a poner». El «osito» es Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y hasta hace unos días vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. En una de las furgonetas, esposados a la espalda, viajan dos de los *consellers* ya cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución: Santi Vila (Empresa) y Carles Mundó (Justicia). Van en dirección a la cárcel de Aranjuez, a unos 40 kilómetros de Madrid.

Vila y Mundó mantienen una buena relación. Ambos son de talante afable. El exconvergente es extrovertido, y el republicano, reservado, pero comparten un carácter razonable, son alérgicos al extremismo y exhiben un trato educado y exquisito. Pertenecen a la misma generación (Vila es de 1973 y Mundó, de 1976) y, dada su

trayectoria y juventud, son aspirantes a desempeñar funciones relevantes en la política catalana. O lo eran hasta hace unos días. Porque esta noche aciaga están sentados cara a cara, aún trajeados, en sendos bancos en una furgoneta que, a cada curva, a cada rotonda, a cada frenazo, provoca que se desplacen impelidos de un lado a otro, dando tumbos. Para evitar salir despedidos, intentan aferrarse, con las esposas puestas, a la rejilla que hay a sus espaldas.

A las puertas de la cárcel de Aranjuez, mientras esperan a bajar del furgón, unos policías deciden «amenizarles» la espera y les hacen escuchar tres veces el himno de España en su teléfono móvil. Vila trata de tomárselo con humor, aunque no tenga ni pizca de gracia. Pero no será Aranjuez su destino. La juez de la Audiencia Nacional ha decidido de repente que irán a Estremera, a unos 60 kilómetros de la capital, casi en el límite con Castilla-La Mancha. El furgón da la vuelta... A la misma prisión han ido a parar los otros miembros del Gobierno de Cataluña. La instructora Carmen Lamela había citado al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y a sus trece *exconsellers*, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista de Cataluña. Solo nueve de los imputados se han presentado en la Audiencia Nacional. Para ocho de ellos, la juez ha ordenado prisión incondicional por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Únicamente a Vila —que dimitió a tiempo— le ha impuesto una fianza de 50.000 euros, aunque va a pasar una noche en la cárcel hasta poder hacerla efectiva al día siguiente.

A la prisión de Alcalá-Meco van destinadas Meritxell Borràs, *exconsellera* de Gobernación, y Dolors Bassa, de Trabajo. Y en Estremera, Vila y Mundó se encuentran con el vicepresidente Junqueras, y con sus compañeros de gabinete Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Asuntos Exteriores) y Joaquim Forn (Interior). Al llegar, siguiendo el protocolo penitenciario, todos son despojados de sus enseres personales y de aquello que pueda servir para lesionarse, como los cinturones. Dos de ellos, Turull y Romeva,

son obligados a desnudarse, como se hace con algunos delincuentes para comprobar que no entran drogas en la prisión. Todos se someten a la revisión médica. Mundó consigna las lesiones leves que se ha producido en las muñecas por el roce de las esposas mientras viajaba en el furgón policial. Después, visita con el educador y con el asistente social. También acude a verles el director de la cárcel, que admite que son presos un tanto peculiares y que, pese a las lamentables circunstancias, espera que se sientan bien tratados.

Les adjudican las celdas por parejas. Las cuentas no salen y hay uno que deberá compartir habitáculo con un preso común. Enseguida todos abogan por que sea Vila, puesto que solo va a estar una noche en la cárcel. Efectivamente, el *exconseller* de Empresa conoce así a un recluso de unos 60 años a quien mira con cierto recelo. Tienen que compartir un espacio de unos ocho metros cuadrados, con una litera, dos sillas, una ducha y un váter sin puertas. El preso intenta tranquilizar a Vila, le ayuda a hacer la cama. Empieza para todos la vida en la cárcel. A las ocho de la mañana, el recuento. A las 8.30 horas, el desayuno y tiempo para hacer una llamada... La pesadilla solo dura una noche para Vila, pero otros permanecerían varios meses antes de salir en libertad condicional y volver a entrar por orden del Tribunal Supremo.

Mientras, Borràs y Bassa viven escenas similares en la prisión de Alcalá-Meco. Durante su encierro, los medios de comunicación les prestan mucha menos atención que a sus compañeros varones, a pesar de que las condiciones de esta cárcel, muy antigua, son objetivamente peores. Quizá por eso, al llegar, les reparten unas pastillas y les recomiendan tomarlas a diario. Borràs, que estudió Farmacia, sabe que son antidepresivos. Su pesadilla diaria son las picaduras de los chinches en la cama. Cuando salen en libertad condicional aún llevan las marcas en brazos y piernas. En ese intervalo, aún creen escuchar a veces el sonido de los cerrojos de las celdas, que se graba como una huella indeleble en sus mentes. Borràs y Bassa habían mantenido una relación cordial, pero dis-

tante, mientras compartían tareas de gobierno. Sin embargo, en la prisión forjan una gran amistad.

La dureza de la cárcel pone a prueba las relaciones personales. Algunas se estrechan, mientras que otras se resienten. Turull y Rull, que habían mantenido posiciones políticas enfrentadas a raíz del congreso de la refundación de *Convergència Democràtica de Catalunya* (CDC), en el que se alumbra el *Partit Demòcrata Europeu Català* (PDeCAT), comparten celda y entablan amistad. En situaciones límite, lo que parecía primordial ya no lo es y viceversa, así que los vínculos personales no se traban por afinidades políticas. Por ejemplo, Turull mantiene en la cárcel buena relación con Junqueras, mejor con Romeva y no conecta tanto con Mundó, los tres últimos de ERC. Entre rejas, están muy aislados de lo que está ocurriendo en Cataluña. Enseguida compran una televisión por celda, aunque solo es posible ver los canales en abierto de ámbito español. Nada de TV3. Así es como Turull, por ejemplo, reconoce un día con el corazón encogido a una de sus dos hijas en una de las movilizaciones para pedir su libertad. A través de la televisión, los dirigentes políticos encarcelados se enteran de algunos acontecimientos relevantes, como la decisión de Carles Puigdemont de presentarse a las elecciones del 21 de diciembre desde Bruselas, donde se ha refugiado junto a otros cuatro *exconsellers*: Toni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Todos ellos huidos de la justicia o, para el independentismo, exiliados. Todos los partidos que abogan por la secesión, incluida la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), han decidido participar en las elecciones, a pesar de haber sido convocadas por Mariano Rajoy.

Una parte de la sociedad catalana parece exhausta después de los intensos acontecimientos de los últimos meses, pero la otra se moviliza contra las medidas de prisión provisional dictadas por la juez Lamela y que después mantendría el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La huelga general del día 8 de noviembre tiene un seguimiento más bien escaso, salvo en sectores como la

educación, pero la actuación de grupos independentistas radicales provoca cortes de tráfico en 70 carreteras y en el AVE. Son los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), creados para defender los lugares de votación del referéndum del 1 de octubre. Estos CDR se sitúan en la órbita de la CUP, pero tampoco responden jerárquicamente a esta organización política. Hay casi 300 repartidos por toda Cataluña y, aunque en principio pregonan la resistencia pacífica, sus actuaciones resultan coactivas.

Desde la cárcel, los políticos presos conocen también por televisión los primeros compases de la campaña electoral e incluso llegan a discutir sobre los posibles resultados cuando se encuentran en algunas dependencias compartidas. En esas conversaciones, los *exconsellers* del PDeCAT ven a los de ERC muy convencidos de que su partido será el indiscutible vencedor de las elecciones.

El día 10 de noviembre, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, también pasa una noche en Alcalá-Meco, de donde sale después de pagar una fianza de 150.000 euros y gracias a una declaración ante el juez en la que admite que la declaración de independencia tuvo un valor «simbólico» y meramente «declarativo», sin ninguna consecuencia práctica, además de mostrarse dispuesta a acatar la Constitución. Pese a esa actitud, Forcadell volverá a ingresar en prisión en pocos meses. Esa línea de defensa, con más o menos énfasis, sería utilizada por todos los miembros de la Mesa del Parlament y, con posterioridad, por la mayoría de los encarcelados para conseguir la libertad condicional. Finalmente, después de 32 noches durmiendo en la cárcel, el 5 de diciembre salen Romeva, Turull, Rull, Mundó, Borràs y Bassa. Atrás quedan Junqueras y Forn. Todos se preparan para abandonar el encierro. Ellos deciden hacerlo trajeados, con «uniforme de *consellers*», excepto Mundó, que se niega y opta por un jersey negro y tejanos. El *exconseller* de Justicia acepta participar de forma muy activa en la campaña de ERC para paliar la ausencia de Junqueras, pero ya ha tomado la decisión de apartarse de la política al menos hasta el juicio.

Parece que la pesadilla se ha acabado, al menos para la mayoría de ellos. En este momento, no pueden imaginar que regresarán solo tres meses después. La despedida de los que se quedan dentro, Junqueras y Forn, es emotiva, intensa. Apenas pueden reprimir las lágrimas. No ven el final del drama que empezó el 2 de noviembre. Fue aquella misma mañana cuando Junqueras exteriorizó en voz alta su convencimiento de que ingresaría en prisión. En el coche que le conduce a declarar ante la juez Lamela, sus colaboradores le van poniendo al corriente de las últimas noticias. Comentan que la fiscalía tiene intención de solicitar la prisión y recuerdan con pesimismo que hace pocos días el comunicado oficial enviado por correo electrónico desde la Fiscalía General del Estado anunciando querellas contra la Generalitat y la Mesa del Parlament llevaba por título «Más dura será la caída». Los augurios se presentan sombríos. Junqueras alberga la íntima certeza de que esa noche probablemente ya no verá a su esposa y sus dos hijos.

La larga espera en un frío pasillo del edificio de la Audiencia es el escenario en el que todos ellos visualizan que su destino más probable es la cárcel. La posibilidad de ingresar en prisión empezó a plasmarse en el horizonte de los miembros del Gobierno de Cataluña a partir del 1 de octubre, cuando tomaron conciencia de que el Estado no estaba dispuesto a ceder bajo ningún concepto. Antes, la mayoría de ellos dibujaban un escenario similar al vivido por Artur Mas, es decir, se iniciaría un procedimiento judicial, deberían acudir a declarar y quedarían probablemente en libertad bajo fianza hasta la celebración del juicio, que tardaría un par de años en llegar. Y, para entonces, podrían ocurrir muchas cosas en el panorama político. Pero desde el 1-O, las perspectivas eran más lúgubres. Tanto, que los días previos a la declaración unilateral de independencia, el aún *conseller* Rull reconocía que había pasado el último fin de semana libre despidiéndose de su familia. Sus presentimientos no iban errados.

¿Cómo es posible que se haya llegado hasta aquí?, ¿cómo podía nadie imaginar que todo un Gobierno elegido en democracia

acabaría entre rejas?, ¿qué clase de fracaso colectivo ha conducido a la fractura de la sociedad catalana y al alejamiento entre esta y la del resto de España?, ¿por qué una parte tan sustancial de Cataluña creyó tener en la punta de los dedos el sueño prometido?, ¿por qué sus líderes eligieron el camino que conducía a un callejón sin salida?, ¿pueden señalarse culpables? Las páginas que siguen desgranar los acontecimientos que han conducido a la explosión de la mayor crisis de Estado en España desde el inicio de la Transición y las motivaciones que indujeron a sus protagonistas a adoptar las decisiones que tomaron y no otras. Unos determinados líderes inmersos en una etapa convulsa, en un tiempo de extrema complejidad que no supieron afrontar.

Tres dirigentes políticos han tenido en su mano la capacidad de tomar un camino u otro en diferentes momentos de los años que van desde el 2012 al 2017, el periodo álgido del llamado «proceso soberanista» catalán. Son Artur Mas, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Ha habido muchos más actores, pero ellos son los tres que pudieron marcar el rumbo. Las metáforas marineras, precisamente, son muy del agrado de Mas, que nada más llegar a su despacho del Palau de la Generalitat colgó un timón con el lema «*cap fred, cor calent, puny ferm, peus a terra*» («cabeza fría, corazón caliente, puño firme, pies en el suelo»), procedente del *Sebastiana*, una corbeta que comandó su abuelo. La determinación de Mas de virar la nave desde ese equilibrio entre reivindicación permanente y el pacto con el Estado que fue el pujolismo hacia el independentismo unilateral es un elemento esencial en esta historia.

En noviembre de 2007 el líder de Convergència pronunciaba una conferencia titulada «El catalanismo, energía y esperanza para un país mejor», en el Palacio de Congresos de Barcelona ante 2.000 invitados de la sociedad civil. Mas había puesto en marcha una plataforma política bautizada como la «*casa gran del catalanisme*» para buscar una mayor transversalidad que superara el movimiento pujolista. En aquella conferencia defendió por primera vez «el derecho

a decidir», pero circunscribió su aplicación solo a cuestiones muy concretas como el Estatut (que aún estaba pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional) o la financiación: «El derecho a decidir requiere que los temas sobre los cuales se ejerza descansen sobre mayorías cualificadas o reforzadas de forma amplia, con la finalidad de darle a la decisión toda la legitimidad y la fuerza necesarias, y también para evitar dividir a la sociedad en dos mitades, con el riesgo de fractura social que eso comporta». E insistía en que el derecho a decidir se debía aplicar «sobre aquellos temas que más nos unen a los catalanes y no sobre los que más nos dividen». Entonces, ¿por qué cambió de opinión?

Mas justifica su viraje por el fracaso de los reiterados intentos del catalanismo por cambiar el «encaje» de Cataluña en España sin que los poderes del Estado lo hayan permitido. Y aporta como argumento definitivo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada en 2010 que anula 14 artículos y sujeta a su interpretación 27 más de los 223 con que cuenta el Estatut aprobado en el Parlament. Un texto negociado *in extremis* por Mas siendo jefe de la oposición con el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y votado por los catalanes en un referéndum que obtuvo el 74 % de apoyo con una participación del 48,8 %.

El «proceso» recibió primero el apelativo «soberanista». En efecto, su pretensión era cambiar por vías democráticas la soberanía del Estado español para que esta residiera también en el pueblo catalán. El debate estatutario sobre la consideración de Cataluña como nación (que finalmente se plasmó en el preámbulo para no darle categoría jurídica) evolucionó en el discurso de una buena parte de los dirigentes catalanes hacia la siguiente fase: ejercer la soberanía propia. Y ese se convirtió en un obstáculo insalvable en la relación entre el poder político catalán y el del resto de España.

El movimiento independentista entronca con el anhelo de arrasar con la herencia de la Transición en todas sus facetas, tanto la del modelo territorial como la social, explotada por Podemos. Porque

el discurso rupturista no solo triunfa en Cataluña. Al mismo tiempo que el independentismo comienza su explosión, Pablo Iglesias y los suyos empiezan a ver cómo cala en la sociedad su propuesta de que ha llegado el momento de derrocar el «régimen del 78», que entienden como una componenda de intereses políticos y económicos de la clase dirigente —«la casta»— que se ha introducido en todos los rincones de la sociedad y la ha corrompido hasta la médula. La narración del independentismo, a su vez, parte de dos premisas. La primera sostiene que España no tiene remedio, por lo que no vale la pena implicarse en su gobernación. Según esa tesis, es indiferente que ocupe el poder cualquiera de los dos partidos que se lo han repartido en las últimas décadas. La segunda defiende que es imposible hallar una incardinación adecuada de Cataluña en España porque el centralismo siempre encuentra alguna vía espuria para limitar los logros conseguidos por el autogobierno. El independentismo prende con ímpetu en tiempos de soflamas rupturistas, en los que pregonar simples reformas es predicar en el desierto.

Durante los cinco años que van de 2012 a 2017, el proceso independentista discurre entre dos sectores que daban apoyo al nuevo relato, pero que perseguían objetivos diferentes. Por un lado, quienes concluyeron, como Mas, que la única forma de conseguir que el Estado se aviniera a negociar un encaje diferente de Cataluña en España, en el que se blindara su singularidad cultural y lingüística y se atendieran sus reclamaciones económicas, era subir la apuesta, estirar la cuerda al máximo para sentarse a la mesa de negociación desde una posición de fuerza. De otra forma, los enviados catalanes siempre acababan laminados por la potente estructura de los abogados del Estado, como solía explicar uno de los principales colaboradores de Mas, su mano derecha en la oposición y en el Gobierno, Francesc *Quico* Homs. Mas encabezaba ese sector. Pero en el proceso también confluyeron de forma impetuosa quienes consideraron que esta era la oportunidad histórica para convertir Cataluña en un Estado independiente. Para ellos, se trataba de una ocasión única: ahora o

nunca. Incluso algunos acuñaron el lema «*tenim pressa*» («tenemos prisa») y justificaron esa premura con el razonamiento de que, cuanto antes Cataluña lograra su independencia, antes gozaría de los recursos y herramientas necesarios para salir de la crisis. Con España en una situación de debilidad en Europa debido a sus maltrechas finanzas, y un movimiento popular en ebullición en Cataluña, creían llegado llegado el momento de dar el salto decisivo. A Puigdemont se le podría incluir emocionalmente en este sector, aunque a veces se manifestara partidario del primero, consciente de las dificultades.

Mas emprendió un camino de incierto final que culminó Carles Puigdemont, al que designó sin apenas conocerle, un dirigente idealista y tozudo, un verso libre de la política, que fue mucho más lejos de lo que su predecesor hubiera ido jamás. Si bien Mas decidió emprender una ruta determinada, en el desenlace todo se le fue de las manos. Echando la vista atrás, el sucesor de Pujol no considera que haya cometido un error al adentrarse en el terreno abierto de la defensa de la independencia porque considera que su deber era escuchar el clamor de la sociedad. Sin embargo, Mas tampoco se hace responsable de los últimos pasos que llevaron a la intervención de la Generalitat, quizá porque su itinerario político siempre estuvo ligado al espíritu más conservador y elitista de la vieja *Convergència i Unió* (CiU), exponente del orden establecido, mientras que Puigdemont perteneció a ese partido casi por tradición, pero siempre lo consideró un instrumento necesario, aunque no demasiado eficaz, para lograr lo que fue su obsesión vital: alcanzar el sueño de la independencia.

Al otro lado, en la Moncloa, reside Mariano Rajoy, un líder impertertable, alérgico a la precipitación e incluso a la iniciativa, un superviviente, una roca contra la que se estrellaron todas las peticiones para proponer soluciones políticas durante cinco años, convencido de la máxima orteguiana que reza que el conflicto catalán no es resoluble, sino solo «conlleuable». Cada político afronta los problemas en función de su trayectoria. Mas salió defraudado de su experiencia estatutaria y seguro de que el diálogo no fructificaría nunca, que

solo un Gobierno central contra las cuerdas cedería parcelas reales de poder. Y Rajoy disponía de su bagaje como negociador del pacto del Majestic, cuando la Convergència i Unió de Jordi Pujol hizo presidente a José María Aznar a cambio de algunos avances en el autogobierno, como el traspaso del control del tráfico a los Mossos d'Esquadra. A Rajoy, un pragmático, no le pareció ningún drama negociar entonces las concesiones que reclamaba el presidente de la Generalitat. Pero sí extrajo de aquella experiencia su convencimiento de que el nacionalismo catalán es un organismo insaciable ante cada cesión. Por si ello fuera poco, el desgaste que supuso para Zapatero el intento de resolver el contencioso mediante un nuevo Estatut acabó por persuadirle de que abrir melones políticos en Cataluña solo podía abocarle a lidiar con una fuente inagotable de problemas. Cada vez que políticos, empresarios o periodistas le inquirían durante los cinco años del proceso catalán por qué no negoció, Rajoy replicaba que cualquier otorgamiento que pudiera hacer al independentismo habría sido insuficiente y no les habría convencido de que abandonaran esa meta.

En este corto, pero intenso, lapso de la historia de Cataluña, muchos más protagonistas tuvieron un papel destacado. Pero el independentismo alegraría a esta premisa que este fue sobre todo un movimiento «de abajo a arriba», que surgió del pueblo y su fuerza acabó por arrastrar a los políticos. Es evidente que la enorme movilización ciudadana que abrazó la idea de una separación de Cataluña del resto de España es un elemento fundamental que define este periodo. Sin ese impulso popular, nada habría sido igual. Otra cosa será el análisis de las causas profundas del malestar que llevó a tantos catalanes a la calle. De igual forma, el *procés* no habría avanzado sin el liderazgo político desde el poder de la Generalitat.

El contexto económico y social propició un hábitat adecuado para que germinara un fuerte y activo movimiento en favor del independentismo. La llamada «revolución de las sonrisas», como se bautizó la movilización en demanda de un Estado catalán, toma impulso

en medio de la peor crisis económica y financiera que vive Europa, y en especial el sur del continente, desde los años 70. No fueron los más desfavorecidos los que impulsaron esta revolución. Quizá su característica más llamativa es el amplio respaldo que enseguida alcanzó entre las clases medias, los profesionales, ciudadanos con estudios y acceso a la información. No fueron tampoco los jóvenes sus impulsores, puesto que la nueva convicción prendió entre todas las edades. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan sin ninguna duda que, en este periodo, las capas más formadas de la sociedad catalana, con estudios superiores, y los residentes en poblaciones medianas o pequeñas son más proclives a la independencia y constituyen, a su vez, los más motivados a la hora de ir a votar. Teniendo en cuenta esa pincelada sociológica, no es de extrañar que las movilizaciones del 11 de septiembre del 2012 al 2017 fueran impresionantes coreografías escénicas, las mayores de toda Europa en las últimas décadas, disciplinadas, familiares y pacíficas.

Los debates sobre si el independentismo catalán es consecuencia o no de la recesión son arduos y objeto de otros estudios. En cualquier caso, si no ha sido el único detonante, tampoco es una circunstancia ajena. Y, a buen seguro, la crudeza de la crisis fue un caldo de cultivo excelente para mensajes simplistas como el «España nos roba» de los primeros compases de este proceso. La socióloga Marina Subirats considera que, ante una crisis de tamaño envergadura, cuando los poderes públicos nacionales y europeos se muestran incapaces de mantener los estándares del Estado de bienestar, los ciudadanos optan por «una idea fácil y visceral: nos vamos». Es lo que ella denomina «una utopía disponible», es decir, una buena parte de los catalanes consideraron que esa salida estaba a su alcance. El sueño de borrar todo lo que se había corrompido para construir una sociedad sin mácula parecía posible. Precisamente, a la tarea de presentar la independencia (sea o no utópica) como una meta factible en un corto plazo de tiempo contribuyó de manera decisiva el Gobierno de Cataluña. Un Gobierno que, como hemos visto, acabó en prisión.